

3. La geopolítica internacional de los apoyos económicos

Jorge E. Taiana

El golpe militar puesto en marcha el 24 de marzo de 1976—con sus bien conocidas y devastadoras consecuencias humanas, sociales y políticas—no puede ser analizado sin tener en cuenta el escenario regional e internacional en que tuvo lugar, que aseguró un marco de legitimación política, de cooperación económica y de seguridad, lo cual permitió el desarrollo y la consolidación del proyecto.

Ofrecemos a continuación una serie de reflexiones sobre el contexto mundial y regional que precedió y acompañó al golpe de Estado en la Argentina, así como sobre el rol de los Estados Unidos y las dinámicas de la diplomacia argentina y de los actores económicos y militares.

La Guerra Fría

Por lo pronto, se trataba del mundo de la Guerra Fría, creado sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, basado en la división del mundo en zonas de influencia entre las dos grandes superpotencias que emergieron victoriosas del conflicto: los Estados Unidos de América y la Unión Soviética.

Estas actuaban como cabezas de dos polos de poder mundial enfrentados en una rivalidad que abarcaba las esferas política (democracia liberal *versus* régimen de partido único; derechos civiles y políticos *versus* derechos económicos y sociales), económica (capitalismo basado en la teoría del mercado y las grandes empresas *versus* socialismo basado en la planificación centralizada y la propiedad pública) e ideológica (individualismo *versus* socialismo). Presentados como dos modelos mutuamente excluyentes, antagónicos y en conflicto permanente, la adhesión y subordinación a los intereses y prioridades de la potencia hegemónica en cada zona de pertenencia se convirtieron a lo largo del período en una exigencia que limitaba severamente la autonomía y las posibilidades de desarrollo de políticas propias en los países de la periferia que no formaban parte central del esquema de poder.

Parte del acuerdo resultó en la creación de las Naciones Unidas, como reemplazo de la fracasada Sociedad de las Naciones, que se transformó en el foro político para encauzar divergencias y consolidar la nueva realidad política internacional. En la Conferencia celebrada en San Francisco en 1945, se cristalizó un esquema de poder que otorgó a los "cinco grandes" el derecho de veto y el virtual dominio sobre una organización que tenía como principal objetivo evitar una nueva guerra global, administrar las tensiones entre los países centrales y regular la lucha anticolonialista que se desarrollaba en el llamado "Tercer Mundo" y que desembocaría en las décadas siguientes en el fin de los grandes imperios coloniales.

No sólo el orden político sino también el económico fueron reestructurados luego del conflicto. El reordenamiento del mundo capitalista fue conducido por los Estados Unidos a través de la adopción, en 1944, de los acuerdos de Bretton Woods. Esos acuerdos sentaron las bases para la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y fijaron las reglas de juego para el mundo financiero, al tiempo que otorgaron un rol privilegiado al dólar. Poco después, en 1947, se estableció el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), un acuerdo arancelario y comercial. Estas estructuras, todavía vigentes, tendieron a instaurar el libre comercio y la libre circulación de capitales, con claras prerrogativas para la producción y expansión de los países desarrollados, que a la vez que protegían sus producciones agrícolas obtenían condiciones favorables para la exportación de bienes y servicios y para la radicación de capitales en el mundo en desarrollo.

Ese mundo polarizado evitó la conflagración directa entre las superpotencias bajo la doctrina de la "disuasión nuclear", basada en un equilibrio que garantizaba la "destrucción mutuamente asegurada" en caso de un conflicto nuclear y que, por eso mismo, lo volvía políticamente imposible.

El concepto de "guerra fría" es en verdad equívoco, ya que se lo suele entender como la existencia de un largo periodo de rivalidad y tensión política entre dos bloques, pero con ausencia de conflictos armados abiertos. Nada más alejado de la realidad. Si bien se evitó un enfrentamiento nuclear entre las superpotencias, las décadas de la Guerra Fría están colmadas de los más diversos y violentos enfrentamientos, que dejaron millones de muertos, heridos y desplazados, y en los que las grandes potencias apostaban a una de las facciones con el objetivo de apoyar a un aliado, ganar influencia en la región, o el más limitado de desestabilizar la zona de influencia del rival.

Desde la guerra en la península de Corea, a comienzos de los cincuenta, hasta la epopeya del pueblo vietnamita —que logra la independencia y la reunificación nacional en 1975, luego de tres décadas de enfrentamientos, de derrotar a tres potencias y de sufrir dos millones de muertos—, pasando por la guerra de secesión de los Iboos en Nigeria, en los sesenta, las diversas guerras en Medio Oriente y las insurrecciones y alzamientos revolucionarios en América Latina, todos estos conflictos, incluidos los aparentemente locales, tienen elementos que los polarizan, los antagonizan y los incluyen en el escenario más amplio de la búsqueda de poder e influencia por parte de las grandes potencias.

De manera concurrente con la Guerra Fría se desarrolló el proceso de descolonización conducido por las Naciones Unidas. Centrado primero en Asia y luego en África, para alcanzar finalmente las áreas insulares del Caribe y el Pacífico, abarcó los más diversos procesos y alcanzó muy distintos grados de acuerdo o confrontación entre colonizador y colonizado, desde la partición de la India en 1947 hasta la independencia de Zimbabue en 1980. Ello permitió el surgimiento de nuevos Estados, que en menos de treinta años triplicaron la membresía de la ONU. En todos esos procesos estuvo también presente el interés y el accionar de las grandes potencias, en busca de establecer mejores relaciones con los nuevos países. En líneas generales, el Segundo Mundo, encabezado por la Unión Soviética, brindó más apoyo a las luchas independentistas y de liberación del Tercer Mundo, enfrentado a un Primer Mundo que se identificaba con el colonizador.

El mundo dividido en dos grandes bloques —capitalistas y comunistas— enfrentados en todas las áreas y "emblocados" en alianzas militares contrapuestas (la Organización del Tratado del Atlántico Norte —OTAN— para quienes seguían el liderazgo de los Estados Unidos y el Pacto de Varsovia para los seguidores de la Unión Soviética), junto con el surgimiento de nuevos Estados producto de la descolonización, crearon las condiciones para la emergencia de posiciones autonómicas que rehusaban aceptar el alineamiento a uno de los dos bloques y planteaban posiciones de equidistancia, es decir, una tercera posición, de no alineamiento. Es bien conocida la independencia de la Tercera Posición levantada en forma temprana por Juan Domingo Perón, que lo llevó a excluir a la Argentina de los acuerdos de Bretton Woods, así como también el accionar de líderes como Nasser, Tito, Nehru y Sukarno, que luego de la conferencia de Bandung llevaron a la creación del Movimiento de No Alineados (NOAL), que alcanzó gran representatividad como vocero político de los países en desarrollo.

El núcleo del no alineamiento o de la Tercera Posición, como su nombre lo indica, es el rechazo a la política de bloques. No se trataba, naturalmente, de negar su existencia, sino de plantear que esa política respondía a los intereses de las grandes potencias y, por lo tanto, un país que quisiera ser soberano no debía subordinarse a ella.

Si en el plano político la búsqueda de autonomía y de una voz propia en el escenario internacional llevó a la creación del NOAL, la necesidad de coordinar posiciones y de elaborar diagnósticos y propuestas en común en relación con los temas de la economía, el comercio internacional y el modelo de desarrollo condujo a la conformación del denominado Grupo de los 77. Este organismo se convirtió en el vocero de los intereses de los países en desarrollo o periféricos frente a las posiciones de los países desarrollados o centrales, que brindaban habitualmente apoyo a las políticas e intereses de las grandes empresas, que en esos años comenzaron a conocerse como multinacionales.

En coincidencia con la Guerra Fría, la multiplicidad de conflictos y el proceso de descolonización, el mundo asistió desde la posguerra a un período sostenido de crecimiento económico, que es considerado como una edad de oro del desarrollo y se extiende de modo ininterrumpido durante casi tres décadas. En un mundo en el que la economía de los Estados Unidos representaba casi el 50% del producto bruto mundial, los perdurables efectos de la crisis de los años treinta parecían haber quedado definitivamente atrás, y la expansión del comercio y de la economía mundiales no parecía tener límites.

Este crecimiento se dio en el conjunto de la economía global y alcanzó a los distintos regímenes políticos y económicos: tanto a las economías capitalistas occidentales, como al mundo socialista y los variados modelos del Tercer Mundo. Así, el supuesto del crecimiento económico y del desarrollo era tan extendido que el debate entre los modelos parecía centrarse en cuál era el camino más rápido y menos costoso para alcanzarlo.

América Latina y los Estados Unidos

En ese mundo bipolar, nuestra América Latina quedó bajo la esfera de influencia estadounidense, lo que no hizo más que consolidar e institucionalizar el papel preponderante que los Estados Unidos habían alcanzado en la región. Si bien su influencia e injerencia en el área reconoce numerosos antecedentes desde el siglo XIX, es durante la Segunda Guerra Mundial cuando los países de la región, con excep-

ción de la Argentina, aceptan subordinarse a la política de defensa y seguridad hemisférica.

En el plano de la defensa, los Estados Unidos impulsaron la firma de una serie de tratados ofensivos y defensivos que tuvieron por finalidad incorporar a los demás países a su estrategia militar de contención frente a la Unión Soviética. En la región, el Acta de Chapultepec de 1945 fue sucedida por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que nació en 1947, en Río de Janeiro, y cuyas bases ya habían sido afirmadas durante la guerra. Ese proceso de institucionalización culminó con la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la Conferencia de Bogotá, celebrada en medio de la insurrección popular en protesta por el asesinato del líder popular Eliécer Gaitán.

En ese marco, la subordinación ideológica, política y militar al liderazgo de los Estados Unidos fue acompañada por una creciente presencia de las grandes empresas de ese origen, que encabezaron procesos de modernización, concentración y extranjerización de las economías de la región. A medida que avanzaba la Guerra Fría y la conflictividad social, ese proceso se volvió más intolerante hacia las experiencias nacionales autónomas que cuestionaban la subordinación a los intereses de la potencia hegemónica. Los casos de la Guatemala de Arbenz, derrocado en 1954 con una abierta intervención de los Estados Unidos, y la caída de Perón en la Argentina en 1955 ejemplifican el accionar disciplinador y el cerco y la asfixia a los que eran sometidas las experiencias nacionales y populares.

Por cierto, el gran conflicto que marcó a la región y se ha prolongado más allá del fin de la Guerra Fría fue la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, y los reiterados y fracasados intentos de los Estados Unidos por acabar con una experiencia autoproclamada socialista y abiertamente aliada y apoyada por la Unión Soviética. La experiencia de Cuba mostró la desigualdad y las injusticias dominantes en la región, así como la ilegitimidad de los regímenes que basaban su vigencia en el apoyo de la gran potencia y en su férreo alineamiento anticomunista. Tensionando el "orden" global, cuestionó la división del mundo en zonas de influencia.

La política regional alcanzó una dimensión global cuando la cuestión cubana marcó una agudización de la Guerra Fría. La frustrada invasión a la isla y la "crisis de los misiles" pusieron a las dos superpotencias al borde del conflicto abierto. Los Estados Unidos, al tiempo que promovían en la región las sanciones a Cuba y la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen revolucionario, lanzaron en 1961 la Alianza para el

Progreso. Concebida como una respuesta global al desafío regional que planteaba la Revolución Cubana, en la práctica constituía un programa de asistencia financiera por parte de los Estados Unidos para promover la modernización de las estructuras económicas y sociales, en el marco del apoyo a la libre empresa y a las inversiones extranjeras. Sus muy pobres resultados destacaron las limitaciones de esa política en la región y la incapacidad de los Estados Unidos para apoyar cambios sustantivos en la democratización de las estructuras productivas y en una mejor distribución del ingreso.

Aun con todas sus limitaciones, los años de crecimiento económico de ese largo ciclo de la posguerra implicaron transformaciones productivas significativas, la modernización de arcaicos modelos de producción agrícola, la emergencia de núcleos organizados de trabajadores industriales, la ampliación del sector público y del rol del Estado, el desarrollo de masivos sindicatos de estatales y educadores, el fortalecimiento de sectores medios independientes y, en general, una mayor demanda de participación y democratización de las estructuras políticas tradicionalmente oligárquicas.

La consecución de estos procesos fue una multiplicación de demandas sociales, políticas y económicas que, ante la ausencia de verdaderos procesos de desarrollo y de democratización de las estructuras, el sistema político vigente tendió a reprimir antes que a satisfacer. Se ingresó así en un período de alta conflictividad social, reiteradas crisis económicas, gobiernos democráticos cada vez más restrictivos y menos legítimos, y creciente participación de las Fuerzas Armadas en actividades represivas, en la resolución de las crisis y en la conducción política de los estados.

La actuación de las Fuerzas Armadas en la conducción política tiene una larga historia en América Latina. Lo que diferencia a esta etapa respecto de experiencias anteriores es el carácter institucional de dicha participación, y que esta adquirió una dimensión más trascendente, local y regional al enmarcarse en el ámbito de la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional", que otorgó un marco estratégico al accionar militar y le brindó un rol destacado en la lucha contra el comunismo internacional en el escenario de la Guerra Fría.

La Doctrina de la Seguridad Nacional

Desarrollada en las academias militares y en las universidades norteamericanas, la Doctrina de la Seguridad Nacional fue la base ideológica y el pensamiento estratégico que permitió estructurar el conjunto de ac-

ciones tendientes a consolidar la hegemonía global de los Estados Unidos, bloquear el crecimiento del área de influencia soviética y disciplinar las demandas en la propia zona de influencia. Si bien tuvo un origen francés, con el nombre de "Doctrina de guerra contrarrevolucionaria", durante las guerras coloniales de Indochina y de Argelia, e instructores franceses la inculcaron en la Argentina aun antes que en los Estados Unidos, fue ampliamente diseminada en América Latina por las instituciones estadounidenses, que la encuadraron en el contexto de la Guerra Fría. De ese modo, se convirtió en doctrina oficial de los ejércitos de la región, con dos consecuencias relevantes para la realidad política. Por un lado, cambió por completo el centro de atención de la formación y del accionar de las Fuerzas Armadas. El enemigo ya no era exclusivamente externo, del cual había que defender a la propia población, sino que, por el contrario, era *parte* de esa población que, en alianza con el comunismo internacional, quería destruir los valores tradicionales de la sociedad. Así, las Fuerzas Armadas pasaron de ser defensoras a convertirse en represoras de su propio pueblo. Por otra parte, la democracia y la participación política se transformaron en prácticas que necesariamente debían estar subordinadas al objetivo principal de la lucha contra el comunismo y la erradicación de los elementos subversivos que cuestionaban el orden vigente. El sistema político no sólo debía evitar que triunfara el comunismo, sino que también debía ser eficaz para extirparlo de las sociedades de la región.

A comienzos de los años setenta, varias situaciones convergieron en la formación del escenario que convertiría a la región, y en particular al Cono Sur, en el territorio donde dictaduras militares basadas en la Doctrina de Seguridad Nacional derribaban gobiernos democráticos, eliminaban toda forma de participación política y la mayoría de las libertades civiles, y aplicaban políticas de represión masivas y sistemáticas sobre amplios sectores de la población.

El largo ciclo de crecimiento económico que había comenzado con la posguerra llegaba a su fin. Anunciada con la crisis del patrón oro, que Richard Nixon abandonó en 1971, la llamada "crisis del petróleo" de octubre de 1973, cuando los Estados productores miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cuadruplicaron el precio del barril, hundió en la recesión las economías desarrolladas y dio por terminado el crecimiento basado en el combustible barato. Los cuantiosos recursos generados por el petróleo fueron reciclados a través de los bancos occidentales y dieron origen al endeudamiento de los países del Tercer Mundo, fenómeno que tendría una enorme gra-

vivación en el cuarto de siglo posterior. Los efectos sobre la economía internacional fueron de larga duración y darían inicio a un largo proceso de reconversión capitalista, que tuvo en los liderazgos conservadores de Ronald Reagan y Margaret Thatcher sus mayores exponentes.

Cuando el ciclo económico comenzó a declinar globalmente, en la región se vivía un fuerte ascenso de masas que reclamaban mayor participación política, mejor distribución del ingreso y modificaciones profundas de las estructuras productivas y de las formas de propiedad. Asimismo, reclamaban para el Estado un rol activo y dominante en la dirección del crecimiento económico y en la propia actividad productiva.

Las fuerzas políticas y sociales que convergieron en estos planteos tenían diversos orígenes pero coincidían en la necesidad de realizar cambios urgentes y profundos. Distintos sectores del nacionalismo popular, de la izquierda revolucionaria, de los movimientos cristianos comprometidos con los pobres, del sindicalismo de base y del clasismo, así como sectores de partidos más tradicionales, multiplicaron su militancia social y política al tiempo que radicalizaron sus críticas al statu quo, bajo la influencia de los profundos procesos de transformación que se daban en distintas partes del Tercer Mundo y ante la evidente crisis política que, desde fines de los sesenta, sacudía a Europa y a los Estados Unidos.

Este auge de masas, como se lo denominaba entonces, se expresó de diversas maneras y afectó al conjunto de la región, donde adoptó variadas formas de participación y de lucha que incluyeron desde la formación de nuevas fuerzas y coaliciones electorales, hasta huelgas insurreccionales y movimientos insurgentes. Si bien en varios países hubo gobiernos que intentaron expresar esa voluntad de cambio, las dos experiencias emblemáticas fueron el gobierno de Unidad Popular encabezado por Salvador Allende en Chile y el retorno del peronismo y de Perón al gobierno en la Argentina.

El camino democrático para la construcción del socialismo que planteó Allende y el regreso de Perón luego de casi dos décadas de proscripción del nacionalismo popular representaron grandes esfuerzos por convertir sociedades económicamente dependientes, dominadas por sectores oligárquicos y por el capital extranjero, en democracias participativas, en las que el accionar del Estado controlara los sectores clave de la economía, redujera el poder de las empresas multinacionales y modificara significativamente la distribución del ingreso.

El desarrollo de estos procesos, más allá de sus contradicciones y conflictos internos, chocó contra la abierta resistencia y la desestabilización a que fueron sometidos por parte de las fuerzas opuestas al cambio, que

veían afectados sus intereses inmediatos y querían recuperar un escenario de mayor disciplinamiento social, desmantelamiento de la legislación de protección laboral,¹ menor control del Estado sobre la economía y mayores privilegios para el accionar de las grandes empresas.

El escenario de clausura de la expansión económica internacional y el horizonte recesivo para la economía mundial no hicieron más que fortalecer la determinación de poner fin a las experiencias populares por parte de los exportadores tradicionales, las grandes empresas y el sector financiero. Así, con el involucramiento activo de la política estadounidense en la región durante las presidencias de Nixon y, luego, de Gerald Ford, se abandonó toda pretensión de legitimidad democrática y se recurrió a unas Fuerzas Armadas unificadas en la Doctrina de Seguridad Nacional. Estas pusieron en marcha las acciones para aniquilar toda forma de organización popular y para modificar de modo radical las estructuras económicas y sociales que habían permitido el desarrollo de tan poderosos cuestionamientos al statu quo.

El golpe de Estado de 1976

La administración de Gerald Ford ofreció su silencioso pero consistente apoyo a las acciones que culminaron con el golpe de 1976. En parte, dicho apoyo reflejaba la convicción de que la resolución del rumbo económico de la Argentina más conveniente para los Estados Unidos no podía quedar en manos de un gobierno civil.² La conducción de la embajada estadounidense en Buenos Aires representaba la tendencia anticomunista y de libre mercado que había caracterizado a las políticas de Nixon en relación con América Latina, y reportó el golpe de Estado como el "mejor ejecutado y civilizado de la historia argentina". En su evaluación

1 Sobre las reformas al derecho laboral argentino llevadas a cabo durante la dictadura, véase el capítulo 14 de este libro.

2 La embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires consideraba que el "terrorismo de izquierda" representaba una "amenaza para los intereses de negocios" de ese país. Cablesgrama del Departamento de Estado, Buenos Aires, A-143, embajada de los Estados Unidos (Montreal) al secretario de Estado (Kissinger), 16 de junio de 1975, sobre "Violencia política en la Argentina", cit. en W. Schmidt, "Institutionalizing Human Rights in US Foreign Policy: US-Argentine Relations 1976-1980", *Diplomatic History*, vol. 35, n.º 2, 2011, p. 356.

de la situación, tanto los intereses de la Argentina como los de los Estados Unidos dependerían del "éxito del gobierno moderado del general Videla".³ Por su parte, el secretario de Estado Henry Kissinger sentenció en un memorando:

Los tres comandantes son conocidos por sus actitudes pro Estados Unidos y anticomunistas [...]. La actitud favorable de la Junta con relación al capital extranjero minimizará cualquier dificultad en término de inversiones. La probable intención del Gobierno de ir en busca de ayuda tangible y moral de los Estados Unidos a efectos de superar apremios económicos constituirá una póliza adicional contra actitudes y políticas abiertamente contrarias a los Estados Unidos.⁴

Kissinger le había dado luz verde a la Argentina: dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al golpe, los Estados Unidos reconocieron formalmente al nuevo gobierno y el Fondo Monetario Internacional le entregó un préstamo de 127 millones de dólares, previamente aprobado. Pronto, sin embargo, la embajada comenzaría a transmitir su preocupación por las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

El 10 de junio de 1976, Kissinger y el entonces ministro de Relaciones Exteriores César Augusto Guzzetti mantuvieron una reunión en la que se abordó en el marco de una relación bilateral. El encuentro privado se produjo en el marco de una reunión de la OEA en Santiago de Chile. El tono atable del intercambio sorprendió al ministro argentino, que no había descartado una reprimenda relacionada con las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Entre comentarios sobre el próximo mundial de fútbol, Kissinger definió esas denuncias como un obstáculo sin chance de interferir en el apoyo amistoso de los Estados Unidos frente al desafío de resolver el conflicto que afectaba a la Argentina lo antes

posible.⁵ Después de esta reunión, Guzzetti fue recibido en misión oficial por el vicepresidente, Nelson Rockefeller, en los Estados Unidos.⁶

Mientras tanto, la Junta tomó la iniciativa para fortalecer las inversiones extranjeras en el país y el comercio internacional. Concretamente, invirtió cifras millonarias en una estrategia de promoción de una imagen de confiabilidad del Estado nacional ante la prensa y de sus relaciones públicas con políticos conservadores y la comunidad de negocios estadounidense. Esta actividad fue impulsada en coordinación con el Consejo de las Américas, asociación fundada y entonces presidida por David Rockefeller, que nuclea aún hoy a las principales empresas norteamericanas con intereses en América Latina. Tal como se explica en el capítulo 2 de este libro, el pensamiento económico neoliberal penetró fuertemente en los centros argentinos de investigación económica y, de manera transitiva, en las políticas del gobierno nacional.

Tras la victoria electoral de James Carter sobre Gerald Ford en 1977, se generó una nueva dinámica en el Departamento de Estado, a partir de la instalación de su Oficina de Derechos Humanos, bajo la dirección de Patricia Derian, y la labor del funcionario Tex Harris desde la embajada en Buenos Aires. Derian y Harris, junto a miembros del Congreso de los Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos con base en Washington DC, que recibían información de sus pares de la Argentina y de las organizaciones de exiliados, tuvieron un papel clave en el proceso de documentación y denuncia de las violaciones de derechos humanos per-

5 Memorando de conversación del Departamento de Estado, Santiago de Chile, 6 (sic) de junio de 1976, disponible en <www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBN/NSAEBB133/19760610%20Memorandum%20of%20Conversacion%20clean.pdf>.

6 Memorando del Departamento de Estado, BUENOS 0687191949Z, Buenos Aires, 15 de octubre de 1976, en el que el embajador Hill reporta sobre las impresiones del ministro Guzzetti tras su retorno de Washington DC: "Guzzetti dijo que la recepción del secretario del Departamento de Estado [...] y las ceremonias dedicadas al monumento a San Martín habían superado sus expectativas. Expresó además su impresión de que los altos funcionarios del gobierno entienden el problema de la Argentina y están con nosotros en este momento difícil. Dijo estar 'satisfecho porque el Departamento de Estado comprendió claramente el problema y no habría confrontación entre los gobiernos por los derechos humanos.'" Disponible en <www.jplco-search.com/cgi-bin/vs.pl?index=302953;query=BUENOS%2006871%20191949Z;SEARCH=Search;opt=ALL>.

3 Telegrama del Departamento de Estado, Buenos Aires, 2061, embajada de los Estados Unidos (Hill) al secretario de Estado (Kissinger), 29 de marzo de 1976, cit. en W. Schmidt, ob. cit., p. 359.

4 Telegrama del Departamento de Estado (Kissinger), Washington, a todos los puestos diplomáticos en las repúblicas de América, 25 de febrero de 1976, sobre análisis de los desarrollos en la Argentina, cit. en W. Schmidt, ob. cit., p. 360. Traducción del autor.

petradas en el país, que fundamentó un cambio de política del gobierno norteamericano hacia el gobierno militar.

Esa modificación se instrumentó, en parte, a través de premios y castigos económicos tales como la reducción de la ayuda militar de 48 a 15 millones de dólares y la retención de más de 1000 millones de dólares de importaciones no militares, incluidas las transacciones bancarias, en tanto no mejorara la situación en materia de derechos humanos.⁷ De hecho, la aprobación de créditos para la compra de turbinas hidroeléctricas estuvo condicionada a la aceptación de la visita que finalmente encabezó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.

Tras la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética y el embargo de la exportación de granos a ese país, se produjo un paradójal replanteo de las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos, cuando aquella vendió millones de toneladas de granos a la URSS. De todas formas, los lazos diplomáticos volverían a fortalecerse con la llegada al poder de Ronald Reagan, en 1980.

Conclusiones

El proceso militar inaugurado en abril de 1976 abrió un nuevo capítulo en la situación internacional de la Argentina, en el marco del estancamiento y la recesión que dominaban la economía mundial desde la crisis energética. La política exterior del gobierno militar se desarrolló en el plano de la "diplomacia económica", encabezada por el ministro Martínez de Hoz, y de la "diplomacia militar", impulsada por las Juntas, en el marco de la inserción activa de la Argentina en el conflicto Este-Oeste, no sin puntos de conflicto con los Estados Unidos (la negativa del gobierno argentino a renunciar al desarrollo nuclear independiente, a pesar de las presiones de Carter, y la preservación del comercio de granos con la Unión Soviética, que se convirtió en el principal comprador de la Argentina en la época del embargo). La sincronía de ambas tampoco estuvo exenta de contradicciones, como las reflejadas en el conflicto por las Islas Malvinas.

La diplomacia económica de Martínez de Hoz dio como fruto inmediato la rápida recomposición de las relaciones con la banca internacional y el sector financiero estadounidense, a cambio de beneficios derivados de la nueva ingeniería de los programas económicos nacionales y el crecimiento del endeudamiento externo. La explícita voluntad de subordinación al orden económico internacional fue, a su vez, la prenda ofrecida a cambio de la "comprensión" y tolerancia de las políticas represivas en el ámbito interno.

La diplomacia militar, por su parte, se nutrió de la convicción "vanguardista" de que se desarrollaba una "tercera guerra mundial" no convencional —librada por un enemigo representado por movimientos subversivos nacionales, apoyados por la Unión Soviética y sus aliados—, de la cual dependía la libertad en Occidente. Si bien se reconocía el liderazgo de los Estados Unidos, se consideraba que la acción militar represiva a nivel nacional y transnacional debía estar libre de limitaciones morales y legales, tales como las representadas por la política de derechos humanos de James Carter.

Estos dos andariveles de la política exterior, la diplomacia económica y la militar, no fueron sino la manifestación del poder de dos actores cuya alianza permitió la usurpación del Estado: las Fuerzas Armadas y los grupos económicos vinculados a los intereses exportadores y financieros.

⁷ Sobre este cambio de política que se vio reflejado en la ayuda bilateral y multilateral (no) otorgada durante el gobierno de Carter, véase el capítulo 6 de este libro.